



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-006-2019-00516-01
Demandante:	Maira Stella Ruíz Medina
Demandado:	Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A
Asunto:	Apelación
Procedencia:	Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Ineficacia afiliación al RAIS

**Medellín, diciembre doce (12) de dos mil veintidós (2022)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, el 21 de octubre del año 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora MAIRA STELLA RUÍZ MEDINA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y de la

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS  
PROTECCIÓN S.A. Radicado 05001-31-05-006-2019-00516-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

La señora MAIRA STELLA RUÍZ MEDINA, instauró demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., a fin que se declare que su traslado a Porvenir S.A. y luego a Protección S.A., es ineficaz por la mala, deficitaria e indebida información que se le suministró; se declare que Colpensiones debe autorizar la afiliación de la accionante y se condene a Protección S.A. a trasladar los dineros de la cuenta de ahorro individual de la accionante a Colpensiones y a la entidad pública a recibir a recibir las sumas de dinero respectivas.

En respaldo de tales pedimentos se indicó que la señora Maira Stella Ruíz Medina, suscribió formulario de afiliación a Porvenir S.A., el 28 de junio de 1999, previa asesoría brindada por un asesor de la referida AFP, luego, el 28 de abril del 2006, suscribió formulario de afiliación a Santander hoy Protección S.A., sin que ninguna de las administradoras realizara una proyección de su situación pensional, así como tampoco se le explicaran las ventajas y desventajas de la decisión que iba a tomar, limitándose a indicarle que se podría pensionar a una menor edad y con una mayor pensión a la que obtendría en el Régimen de Prima Media.

### **1.2.- CONTESTACIÓN**

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, indicando que es cierto lo relacionado con la fecha de nacimiento de la

demandante, así como las afiliaciones realizadas a Porvenir S.A. y a Protección S.A., sin constarle los demás hechos de la demanda, por ser ajenos a su representada.

A su vez, propuso la excepción de imposibilidad de que Colpensiones decrete la ineficacia del traslado.

Por su parte, **PORVENIR S.A.** al replicar la demanda, expresó que la AFP no omitió ningún detalle relacionado con las ventajas y desventajas del Régimen de Ahorro Individual, brindándose la asesoría pertinente, a efectos que la decisión que iba a tomar, fuera libre y voluntaria, brindándosele toda la información de manera clara, precisa y veraz, de tal manera que no existieran vicios en el consentimiento.

En oposición al éxito de las pretensiones, formuló las excepciones de prescripción; buena fe; inexistencia de la obligación; compensación y la genérica.

Finalmente, la demandada **PROTECCIÓN S.A.**, afirmó que brindó a la demandante, una asesoría integral y completa, respecto las implicaciones de su decisión, sin omitir información e indicando las características, regulaciones del Régimen de Ahorro Individual y su funcionamiento, así como los rasgos diferenciadores respecto del Régimen de Prima Media, señalando con claridad la forma de construir la pensión, en uno y otro régimen.

Como excepciones, formuló las de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir; buena fe; prescripción; aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones; reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP; inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa; inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta

de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe y la innominada o genérica.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO**

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, puso fin a la primera instancia mediante fallo proferido el 21 de octubre del año 2022, por medio del cual denegó las pretensiones de la demanda, sin efectuar condena en costas.

### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

#### ***Demandante***

El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación, aduciendo que teniendo en cuenta que tanto Protección S.A. como Porvenir S.A., no brindaron la asesoría suficiente y que la misma Juez manifiesta que lo que genera la ineficacia es la falta de información, se tiene que con el fallo recurrido se desconoce todo el andamiaje jurisprudencial de varios años, citando varios apartados de la sentencia 31989 del 2008.

Adujo que brilla por su ausencia la asesoría brindada a la actora al momento del traslado y en los años posteriores, la misma que debió ser requerida faltando menos de los 10 años para cumplir la edad mínima pensional, echando de menos la falta de información veraz y suficiente, resaltando que la información viciada no se convalida con otros traslados. Cita de igual forma las sentencias 23083 y 31314 del 2011.

Solicita se revoque la providencia de primera instancia y se acojan en su totalidad los argumentos de la demanda, a efectos que la actora pueda regresar a Colpensiones.

## **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunciaron los apoderados de la parte demandante y de Colpensiones. El vocero judicial de la activa, reiteró los argumentos que sustentan el recurso de apelación, insistiendo en su petición de revocar la providencia de primera instancia y se acojan las súplicas de la demanda.

Por su parte, el apoderado de Colpensiones, solicitó se confirme la providencia de primera instancia, por cuanto el traslado que realizó la actora a Porvenir S.A., lo hizo conforme a la legislación que regulaba la materia, es decir, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, realizándolo dentro de la legalidad, por lo que se debe confirmar la providencia, ya que Colpensiones no puede asumir las consecuencias de actos de terceros.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

### **2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA**

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que la señora Maira Stella Ruíz Medina nació el 22 de septiembre de 1962, tal y como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 44 del anexo 01 del expediente digital.
- Que la actora se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Porvenir S.A. el 28 de junio de 1999, con fecha de efectividad el 1º de agosto de la misma anualidad y a Pensiones y Cesantías Santander el 28 de abril del 2006, con fecha de efectividad el 1º de junio del 2006, de conformidad con los formularios de afiliación y el certificado del SIAFP visibles a folios 19 y 20 del anexo 01 y folio 73 del anexo 04 del expediente digital.
- Que la accionante acredita un total de 1829.15 semanas cotizadas, conforme a la historia laboral expedida por la AFP Protección S.A., el 8 de octubre del 2020, la cual milita a folios 35 a 55 del anexo 04 del expediente digital.

### **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe determinar la Sala:

¿Si es procedente revocar la sentencia objeto de apelación, proferida en el presente proceso por la señora Juez Sexta Laboral del Circuito de Medellín, debiendo determinar para tal fin, si es ineficaz la afiliación de la accionante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por Porvenir S.A. y su posterior traslado a Santander hoy Protección S.A., con la cual se generó el cambio de régimen pensional?

### **2.4.- TESIS**

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, es procedente la declaratoria de la ineficacia del acto de traslado por incumplimiento del deber de información y, por lo tanto, debe ordenarse el traslado de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante. En consecuencia, la sentencia debe ser REVOCADA para en su lugar declarar que la demandante se encuentra válidamente afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin solución de continuidad, condenando a PROTECCIÓN S.A., trasladar a COLPENSIONES, la totalidad de los dineros de la cuenta de ahorro individual de la actora, incluidas las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales, éstos últimos conceptos con la respectiva indexación, ordenando a Colpensiones recibir dichos aportes y validar la afiliación de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin solución de continuidad. En igual sentido se ordena a PORVENIR S.A., el traslado de las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales, que afectaron el valor de la cotización obligatoria en vigencia de la afiliación a dicha AFP, esto es, entre el 1º de agosto de 1999 y el 31 de mayo del 2006, debidamente indexados.

## **2.5.- PREMISAS NORMATIVAS**

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el régimen público de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado. (artículo 12).

El Régimen de Prima Media con Prestación Definida está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para 1994 y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

En este contexto de dualidad, el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, establece como característica del sistema general de Pensiones, la libertad de selección de régimen en los siguientes términos *“la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para el efecto manifestara por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1° del artículo 271 de la presente ley”*.

A su vez, el artículo 271 ibidem establece que: *“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se*



*hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.* (subraya de la Sala)

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, decreto 663 de 1993, el artículo 4 del decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del decreto 720 de 1994.

Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de Pensiones; véase la ley 1328 de 2009, el decreto reglamentario 2555 de 2010, la ley 1748 de 2014, el decreto 2071 de 2015 y la circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular del afiliado, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras pensionales, como condición de eficacia del traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la información objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos SL, Rad, 31989 del 08 de septiembre de 2008; SL Rad. 31314 del 08 de septiembre de 2008; SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011; SL31314 del 06 de diciembre de 2011, SL 19447 del 27 de septiembre de 2017; SL 17595 del 19 de octubre de 2017, SL 413 del 21 de febrero de 2018; SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018; SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, SL 1452 del 03 de abril de 2019; SL1421 del 10 de abril de 2019; SL1688 del 08 de mayo de 2019; SL 1689 del 08 de mayo de 2019; SL3464 del 14 de agosto de 2019; SL 4360 del 09 de octubre de 2019; SL4426 del 16 de octubre de 2019; SL1611 del 01 de julio de 2020; SL 2877 del 29 de julio de 2020; SL SL1442 del 21 de abril de 2021; SL3349 del 07 de julio de 2021; SL5252 del 24 de noviembre de 2021 . y más recientemente en las sentencias SL1017 del 23 de marzo de 2022, SL1498 del 27 de abril de 2022 y SL1637 del 11 de mayo de 2022, entre muchas otras.

De acuerdo con la ratio decidendi de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, debe aplicarse las dos sub reglas principales establecidas por el máximo Tribunal de la jurisdiccional ordinaria laboral, esto es i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones y ii) la inversión de la carga de la prueba, que les traslada la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

## **2.6.- CASO CONCRETO**

En el caso concreto, se establece el traslado de régimen pensional de la señora Maira Stella Ruíz Medina, a través de la AFP Porvenir S.A. el 28 de junio de 1999, con fecha de efectividad el 1° de agosto de la misma anualidad y a Pensiones y Cesantías Santander hoy Protección S.A. el 28 de abril del 2006,

con fecha de efectividad el 1º de junio del 2006, de conformidad con los formularios de afiliación y el certificado del SIAFP visibles a folios 19 y 20 del anexo 01 y folio 73 del anexo 04 del expediente digital, no obstante, los mismos no dan cuenta de la información que fue brindada a la accionante, tal y como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“Como en muchísimas ocasiones lo ha sostenido esta Corte, dicha carga no se supe con la firma del formulario o porque en el mismo se utilicen leyendas o afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado”* (sentencia SL3871 de 2021); por ello no puede inferirse la voluntariedad del traslado en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

Aunado a lo anterior, advierte esta Colegiatura que no existe medio de convicción alguno, a partir del cual pueda establecerse que Porvenir S.A y posteriormente Santander hoy Protección S.A., cumplieran con el deber profesional de información, para garantizar la decisión libre, voluntaria e informada de la afiliada, sobre las implicaciones del traslado.

Del interrogatorio de parte practicado a la demandante, no se deriva prueba de confesión, en tanto que la misma indicó que se encontraba en la sala de profesores del colegio en el que laboraba y llegó un asesor de Porvenir S.A., que les indicó que el ISS se iba a acabar, que si se quedaban ahí corrían el riesgo de perder el dinero, que pasándose a la AFP tendrían una pensión más alta por la rentabilidad, que se podrían pensionar a cualquier edad y que al momento de pensionarse, podrían elegir recibir la pensión o la totalidad del dinero ahorrado. No recuerda lo relacionado con la afiliación a Santander hoy Protección S.A.

En este escenario probatorio, ante la ausencia de medios de prueba que den cuenta de la información que brindó Porvenir S.A., a la demandante, al

momento de efectuarse el traslado de régimen pensional, se torna imperiosa la declaratoria de la ineficacia de la afiliación.

No considera la Sala acertada la posición de la falladora de primer grado, quien, pese a que concluye acertadamente en su análisis que las AFP demandadas no cumplieron con el deber profesional de información, subsiguientemente considera que es improcedente la declaratoria de ineficacia, argumentando que se aparta de las subreglas jurisprudenciales establecidas por la Corte Suprema de Justicia para dar respuesta al problema jurídico planteado en esta clase de procesos. Lo anterior habida cuenta que la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria resulta vinculante respecto a los mismos asuntos, en virtud de su función unificadora y del derecho a la igualdad de los usuarios de la administración de justicia, siendo claro que la normativa a aplicar en este asunto es el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, que niega eficacia a la afiliación en virtud de la afectación a la libertad de selección de régimen que deriva del incumplimiento del deber de información, sin que pueda ser el afiliado quien se vea afectado por las omisiones de las AFP, tal y como lo expuso el apoderado recurrente.

### **Sobre los efectos de la ineficacia**

Ahora bien, atendiendo a la ineficacia que se declarará, debe indicarse que la consecuencia de la misma, lo es que las cosas vuelven al estado en que se encontraban, ello implica que la demandante conserva válida su afiliación al Régimen de Prima Media, por lo tanto, lo que procede es la devolución de la totalidad de los dineros que hubiere recibido la administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, esto es, Porvenir S.A. y Santander hoy Protección S.A., en vigencia de la afiliación de la pretensora.

Ello por cuanto la ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto, no pueden excluirse del traslado, las comisiones de administración, los seguros previsionales, ni los aportes al

Fondo de Garantía Mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización de la demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones, quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte completo al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, para garantizar el financiamiento de la futura pensión de la actora.

No puede afectarse, además, el fondo común de naturaleza pública del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con la disminución de la cotización en favor de las administradoras accionadas, teniendo en cuenta, que fue Porvenir S.A., quien dio lugar a la sanción del acto jurídico, en virtud del incumplimiento al deber de información, siendo Protección S.A. la entidad en la cual se encuentra vigente la afiliación de la actora, por lo tanto, deben asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil.

De otra parte, los rendimientos generados, mientras estuvo activa la afiliación, son de propiedad de la demandante y no de los Fondos, tampoco resultan ajenos al régimen administrado por Colpensiones, conforme al literal b) artículo 32 de la Ley 100 de 1993, dado que el fondo común también se integra por rendimientos de las cotizaciones de los afiliados y por lo tanto no pueden compensar los gastos administrativos.

Los aportes al Fondo de Garantía Mínima, cuya aplicación es exclusiva del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deben ser trasladados conforme al artículo 7 del Decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por el afiliado, no así cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

Ahora, en cuanto a los porcentajes de seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación de la

accionante, también generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación, también deben ser trasladados, siendo claro que, al no estar estos conceptos dentro de la cuenta de ahorro individual de la promotora de esta acción, deben ser trasladados con cargo a los propios recursos de la AFP demandada y por lo tanto no afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora.

Respecto a los conceptos que deben ser trasladados como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, se pronunció recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2877 del 29 de julio de 2020, indicando:

*“Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular”*

*De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.*

*En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

En la misma providencia se pronunció la Alta Corporación, en torno a la procedencia de extender la obligación de devolución a todas las AFP a las cuales haya estado vinculado el afiliado *“los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión.”*

En cuanto a los conceptos a devolver, la Corte reafirmó su criterio en la sentencia SL 3034 de 2021, en la cual sobre el punto se indicó:

*“Resultan suficientes las consideraciones vertidas en sede extraordinaria para denegar prosperidad a la alzada y al surtir el grado jurisdiccional de consulta, se advierte que el restablecimiento pleno o completo, como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en los términos de la sentencia CSJ SL2877-2020, requiere especificar y detallar algunas de las condenas impartidas por el a quo, razón por la cual se procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 03 de diciembre de 2018, precisando y adicionando el ordinal segundo en el sentido de que Old Mutual SA, además, deberá trasladar a Colpensiones, lo recaudado por comisiones y gastos de administración debidamente indexados durante todo el tiempo que la accionante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima”.*

### **Sobre la indexación**

En atención a que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en las sentencias SL 5236, SL 5285, SL5337, SL5525, SL5543 de 2021 y SL950 de 2022, ha adoctrinado que la indexación de los descuentos objeto de devolución como lo son las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales de invalidez

y sobrevivencia, es un efecto inherente a la declaratoria de ineficacia, con el cual se busca no afectar la estabilidad financiera de Colpensiones, se ordenará la indexación de las referidas sumas.

Colofón de lo anterior, debe REVOCARSE el fallo apelado.

Sin costas en esta instancia. Las de primera instancia corren por cuenta de Porvenir S.A. y Protección S.A., las cuales deberán ser fijadas por la a quo, precisando, que Colpensiones es un tercero ajeno en el acto que se declara ineficaz y en tal sentido no puede imponérsele costas procesales.

### **3.- DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### **FALLA:**

1.- Se REVOCA la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, el 21 de octubre del 2022, en el proceso ordinario instaurado por la señora MAIRA STELLA RUÍZ MEDINA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y en su lugar:

- a) Se declara la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por PORVENIR S.A., efectuado por la actora y su posterior movilidad a SANTANDER hoy PROTECCIÓN S.A., declarando que la demandante se encuentra válidamente afiliada al



Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin solución de continuidad.

- b) Se condena a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES, la totalidad de los dineros de la cuenta de ahorro individual de la actora incluidas las cotizaciones y rendimientos, así como las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales, éstos últimos conceptos con la respectiva indexación.
- c) Se ordena a Colpensiones recibir dichos aportes y validar la afiliación de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin solución de continuidad. En igual sentido se ordena a PORVENIR S.A., el traslado de las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales, que afectaron el valor de la cotización obligatoria en vigencia de la afiliación a dicha AFP, esto es, entre el 1º de agosto de 1999 y el 31 de mayo del 2006, debidamente indexados.

2.- Sin costas en esta instancia. Las de primera instancia están a cargo de Porvenir S.A. y Protección S.A., las agencias en derecho deben ser fijadas por la a quo.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3º literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la

Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
**Magistrada**



**MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**  
**MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**  
*Se suscribe con firma estancada por salubridad pública*  
*(Art. 11 Deceto 492 de 2020)*



**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**  
**Magistrado**